

Desafíos de la Educación Superior en Bolivia

En principio, y en conocimiento de todo cuanto se tiene a la fecha, en materia de educación superior, las universidades son instituciones políticas de la sociedad. Esta caracterización se sustenta en hechos históricos que muestran que en ellas se expresan y actúan grupos sociales con visiones y proyectos distintos, en muchas ocasiones encontrados, propio de un sistema democrático en que se vive. Éstos se refieren generalmente al sentido mismo de las universidades, su papel en distintos momentos históricos y su interacción con las sociedades en las que se ubican.

Como organizaciones dedicadas a la generación, la recreación y la transmisión del conocimiento, estas expresiones diversas suelen centrarse en temas de acceso a los espacios educativos, los bienes y productos culturales de que son depositarios; en la orientación y el uso de los conocimientos generados y recreados; en la distribución de los recursos. A pesar de la evidencia histórica, durante más de medio siglo los enfoques y prácticas políticas en Instituciones de Educación Superior (IES) fueron estigmatizadas, rechazadas y condenadas como patologías indeseables, ajenas a la naturaleza misma de las universidades, los institutos y los colegios superiores.

Por décadas, la reflexión académica sobre la educación superior se adscribió al paradigma político del apoliticismo. Con muy pocas excepciones, los estudios sobre sistemas e instituciones de educación terciaria abordaron temas de políticas públicas, de gobierno y de organización, dejando de lado los análisis sobre el conflicto y la dinámica política en el interior y alrededor de las IES.

Del mismo modo, vuelve a aparecer con gran fuerza la necesidad de repensar el gobierno y la gestión de las Instituciones de Educación Superior para que, a partir del reconocimiento de la politicidad y la diversidad que las caracteriza, se puedan establecer nuevos procesos y estructuras que garanticen la participación de las comunidades académicas en la discusión y en la toma de decisiones. Aquí, se trata de que las reflexiones académicas permitan una mejor comprensión de los conflictos sociales y políticos que tienen lugar en el ámbito de la educación superior.

Todo esto, que contribuyan a formular propuestas y alternativas fundadas en el conocimiento, a identificar dificultades y a canalizar la resolución de conflictos por vías democráticas, compatibles con la naturaleza de la vida académica.

Algunos podrían argumentar que todos los estudiantes tienen la misma oportunidad de solicitar cupo en las instituciones públicas, lo que sería verdad si todos los estudiantes recibieran una preparación académica igual en el



colegio, o si las universidades públicas tuvieran suficientes cupos para acomodar toda la demanda de educación superior.

La importante convergencia de los principios y de los objetivos generales de las políticas no es suficiente para explicar satisfactoriamente el complejo entramado de cambios y las interacciones dinámicas que se producen entre las diferentes fuerzas de la esfera mundial, regional y local que conforman la elaboración de políticas en cada país y muy particular en el nuestro.

Dentro de este contexto, la educación superior adquiere creciente importancia, tal como lo indica la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) en el informe Metas Educativas 21: El desarrollo de las naciones depende ahora más que nunca de la calidad de la formación a la que se accede en las universidades y del conocimiento que se pueda generar y acumular en ellas. El estado de los países de la región iberoamericana es, en este sentido, muy débil, y los pone en desventaja y en riesgo de exclusión respecto del progreso acelerado del mundo desarrollado, porque los avances tecnológicos generan dinámicas de exclusión aún mayores que las tradicionales (OEI, 2010:137).

La transición hacia la economía del conocimiento ha ocasionado transformaciones profundas en las estructuras productivas y una redefinición de las funciones de las instituciones de educación superior. El surgimiento de nuevos paradigmas tecnológicos (tecnologías de información y comunicación, nano y biotecnologías) están cambiando las dinámicas y las relaciones de las instituciones de educación superior con el sector productivo en los países desarrollados. Se empieza a agregar la transferencia de tecnología y conocimiento a través de la aplicación y diseminación de los resultados generados de la investigación académica y, en suma, la creación de beneficios económicos derivados de ellos.

La importancia de las políticas públicas para fortalecer los sistemas nacionales de educación superior y su contribución al desarrollo de las sociedades – capacidades humanas profesionales, científicas y técnicas; personal académico y docentes para el sistema escolar; información, conocimiento, tecnologías; comunicación cultural y científica con el mundo; movilidad social y formación ciudadana; colaboración con la industria y la sociedad civil– es un hecho ampliamente reconocido en la vida contemporánea de las naciones, y con mayor interés en nuestro país con el avance de trabajos que se cumplen en instituciones como el SIBTA donde la nano tecnología ha llegado a desarrollar trabajos en quinua y papa, principalmente.

Así, por ejemplo, entendemos que las políticas públicas hacen parte del Estado e involucran la acción de los gobiernos, pero que admiten también la presencia



de actores no-estatales, las propias organizaciones académicas y la sociedad civil. Nacen frecuentemente de arriba hacia abajo, como un diseño operado desde la cúspide. Pero también pueden surgir desde abajo hacia arriba, con el impulso provisto por coaliciones o movimientos sociales. Las políticas, tal como aquí se utiliza este concepto, forman parte de un campo estructurado de poder, pero, a la vez, se manifiestan como cursos de acción, medidas e instrumentos. En partes, movilizan intereses, sin duda, pero también ideas; por eso, en su análisis importa la economía e importa la cultura. Adjudican beneficios, pero al mismo tiempo arbitran valores, no siempre presentes en un análisis de contextos educativos. Son proceso y producto a la vez, suelen estar expresadas en documentos, textos, aunque en ocasiones forman parte de constelaciones discursivas más amplias o ideológicas.

Las políticas son palabras y obras a la vez; sin palabras carecen de relato, no se integran a una narrativa, y su legitimación es más costosa. Sin obras no pueden sostenerse mucho tiempo, y son recusadas como meras intenciones, llegado a promesas no siempre llegadas a su cúspide. Necesitan apoyarse en información, conocimiento y evidencia provista por la academia, pero en su elaboración, negociación y ejecución requieren integrar también el conocimiento local, de base, de los diversos grupos, actores y partes interesadas. Las políticas buscan resolver problemas que han ingresado a la agenda pública o de los gobiernos, pero también crean problemas, producen efectos imprevistos, a veces perversos, o impactos que vuelven a desencadenar el ciclo de políticas. Adicionalmente, hay reglas e instancias para adoptar estas decisiones; sin embargo, participan múltiples actores de manera formal e informal, interactuando entre sí frente a un horizonte de resultados inciertos.

Las políticas, se dice, incluyen momentos y lugares de codificación (producción de textos, enunciados, emisión) y también, tan importantes como aquéllos, otros momentos de recepción, de codificación e interpretación. A su turno, el significado de una política, y de sus resultados, es objeto de variadas interpretaciones por parte de los agentes y partes interesadas y afectadas, y por los analistas, aspecto que lo vemos a diario en las diferentes publicaciones punto central para este artículo de desafíos de la Educación Superior. Otra característica de estos procesos es que ellos consisten en elecciones públicas que usualmente conllevan la asignación de recursos fiscales y la adjudicación de valores; sin embargo, la elección puede ser también la de no actuar y de esta manera mantener el nivel de recursos previamente asignados y los arreglos de poder que configuran el statu quo.

Con todo, el ciclo de políticas no es lineal ni encadena sus fases de manera sucesiva, dentro de un desarrollo racional y controlado. Por el contrario, las



políticas son un campo esencialmente disputado; manifiestan deseos, intereses y objetivos encontrados, y suelen avanzar en círculos, o en línea quebrada, oscilantemente, repitiéndose sin parar hasta llegar a resolver interactivamente el problema a la mano o postergar su abordamiento o meramente desplazarlo, que se manifiesta en todo proceso democrático como el que se vive actualmente en nuestro país.

Lo que emerge en el horizonte de la educación superior en nuestro país, son nuevas formas de gobernanza de los sistemas nacionales. En este caso, se sugiere preguntar ¿Por qué hablar de gobernanza y no de gobierno? Porque, como señala con abundante evidencia la literatura especializada, estamos frente a una transición de múltiples dimensiones en las maneras de producir orden y control en las sociedades capitalistas contemporáneas. Tal como indica la acorde al tema, nos hallamos en presencia de un desplazamiento de la política a los mercados; de los políticos a los expertos; de las jerarquías políticas, económicas y sociales hacia la jerarquía descentrada de los mercados, las alianzas y las redes; de la provisión del servicio a su regulación; del Estado positivo al Estado regulador; de lo nacional a lo regional supranacional.

En otras palabras, una política pública puede entenderse como textos, los cuales están constituidos por discursos. Las políticas educacionales son vistas como representaciones que son codificadas y decodificadas de distintas maneras: los textos públicos varían de acuerdo al grado de interpretación que permiten al lector, pero siempre e inevitablemente los textos son interpretados e impugnados, adoptados en y adaptados a diferentes contextos de trabajo. Así, las políticas son constantemente hechas y re-hechas en diferentes espacios educacionales. Este enfoque provee un mejor entendimiento de la complejidad de las relaciones involucradas en la elaboración de las políticas. Además, provee la oportunidad de observar políticas específicas en contextos específicos.

